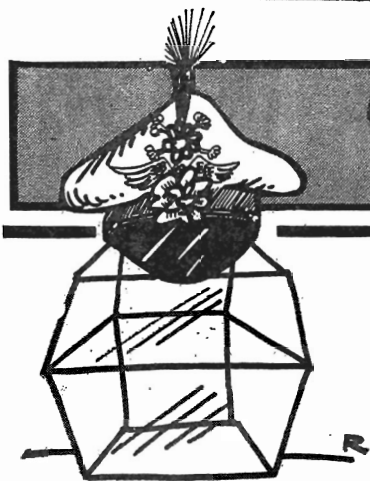


URUGUAY: ¿Hacia una democracia vigilada?

Arturo
PEREZ-REVERTE
Enviado especial



1



Militantes del Partido Blanco recorriendo las calles de Montevideo. El pueblo aguarda impaciente el retorno de la democracia

FALTAN pocas semanas para que los militares uruguayos, tras diez años de ejercicio absoluto de Poder, inicien el diálogo —que se anuncia difícil— con los dirigentes de los partidos políticos nacionales, electos popularmente el 28 de noviembre del pasado año. Lo que, con vistas a esa negociación, están analizando con lupa estos días los espadones de Montevideo es precisamente cuál será el papel futuro que las Fuerzas Armadas uruguayas desempeñarán durante y después del proceso democratizador del país. Según Arturo Pérez-Reverte, que estuvo recientemente en Uruguay, «considerada la cuestión en términos lúdicos, podríamos utilizar el símil de que, si de una partida de póquer se tratara, los milicos, en la víspera, se están dedicando concienzudamente a marcar las cartas de la baraja». Este es el informe de nuestro enviado especial.

Después del plebiscito de 1980, cuando la población rechazó de plano el proyecto de Constitución gestado por los militares, la necesidad de una reforma en las estructuras políticas del país se hizo evidente. Frente al intento de imponer una ley fundamental que de hecho no era sino la perpetuación del «statu quo», manteniendo el régimen castrense amplios poderes que le permitirían seguir teniendo en la mano la totalidad de los resortes de la nación, las fuerzas progresistas uruguayas consideraban que la Constitución de 1987, todavía vigente, es una de las más perfectas de las elaboradas en el país. Pero sobre todo la oposición popular encabezada por los partidos políticos opositores como (dato importante) los oficialistas sostienen que la existencia del COSENA como tal es incompatible con un Estado democrático, y señalan que el Consejo de Seguridad Nacional debe convertirse en un órgano asesor del futuro presidente de la República, si pero desprovisto de facultades de decisión. Este es el principal escollo que deberá sortearse en las negociaciones de «apertura» que está previsto se inicien en marzo y de su resolución en un sentido u otro depende no sólo el papel de los militares en la futura democracia uruguaya, sino el establecimiento real o no de esa misma democracia.

"Que vuelvan a los cuarteles"

Naturalmente, tanto los sectores políticos opositores como (dato importante) los oficialistas sostienen que la existencia del COSENA como tal es incompatible con un Estado democrático, y señalan que el Consejo de Seguridad Nacional debe convertirse en un órgano asesor del futuro presidente de la República, si pero desprovisto de facultades de decisión. Este es el principal escollo que deberá sortearse en las negociaciones de «apertura» que está previsto se inicien en marzo y de su resolución en un sentido u otro depende no sólo el papel de los militares en la futura democracia uruguaya, sino el establecimiento real o no de esa misma democracia.

CLAMOR POR EL CAMBIO

De lo que no cabe duda es de que Uruguay, inmerso en una crisis sin precedentes que alcanza a todos los sectores del país, atenuado por una férrea dictadura militar alineada con los más radicales regímenes reaccionarios del «cono sur» iberoamericano, clama por el cambio. Tras el aludado rechazo que supuso el rechazo a la Constitución impuesta por los militares, los recientes resultados de las elecciones internas registradas en los partidos



El presidente uruguayo, general Gregorio Álvarez. Su cedió al civil Aparicio Méndez, «hombre de raja» del Ejército

democráticos autorizados se orientaron claramente hacia las tesis de abierta oposición al régimen militar. El 30 de noviembre de 1982, el cómputo global de votos señalaba que el 85 por 100 era favorable a los sectores más iz-

El mes próximo se inician las negociaciones entre las Fuerzas Armadas y los partidos para la normalización de la vida política en el país

quierdistas de los partidos que concurrían a las elecciones, con sólo un 15 por 100 a favor de las tesis oficialistas.

Los comicios iban encaminados a la elección de los representantes de los tres partidos uruguayos autorizados (el cuarto, Frente Amplio Opositor, está proscrito y sus líderes se encuentran fuera del país), que discutirían con el Gobierno militar del general Álvarez las reformas constitucionales que abrirían el camino a las elecciones generales, previstas para 1984. En el Partido Blanco, el éxito del sector más

progresista, que sigue al exiliado Wilson Ferreira Aldunate, fue aplastante, consiguiendo casi el 73 por 100 de los votos internos. En el Partido Colorado, la facción del también progresista Julio María Sanguinetti barrió literalmente a la tendencia del ex presidente uruguayo Jorge Pacheco Areco, hombre profundamente ligado a los militares, que no rebasó el 28 por 100 de los votos emitidos por su partido. En resumen, en el porcentaje de votos que señalaron el número de representantes de cada partido que se sentarán en marzo a la mesa de negociación con los militares, el Partido Blanco obtuvo el 46,4 por 100, y el Colorado el 39,7. Los votos en blanco, casi el 11 por 100, corresponden a simpatizantes de los partidos de izquierda, prohibidos desde 1973, y a los que el Frente Amplio Opositor representa en el exilio.

DEMOCRACIA TUTELADA. NO

Las lecciones de los comicios interpartidos fueron evidentes: la fuerza popular de oposición a las tesis oficialistas favorables a los militares se manifestó extremadamente poderosa, y la ventaja obtenida por el Partido Blanco frente al Colorado demostró que el pueblo uruguayo no perdona a este

● "No exigiremos responsabilidades a los militares por estos diez años de dictadura"

último (que en otro tiempo fue vanguardia de la izquierda progresista) su responsabilidad cuando la instauración de la dictadura militar, política de nefastos compromisos o tagnonía en la época por Pacheco Areco, durante cuyo mandato presidencial se instauró realmente la dictadura militar que despusó cuando Bordaberry.

En noviembre de 1980 en noviembre de 1982, uruguayos demostraron reiteraron que no estaban dispuestos a emprender camino de una democracia tutelada por las Fuerzas Armadas. El triunfo primario del «no» a la Constitución de los milicos y después «sí» a las corrientes progresistas de los partidos democráticos autorizados, puso manifiesto que los espadones uruguayos no pueden seguir ignorando por más tiempo los anhelos democráticos del pueblo al que durante años han tenido amordazada y que la batalla por mantener la privilegiada situación de poder castrense en el proceso democrático en cierva a resultar ardua para milicianos. La batalla por funciones del Consejo Nacional de Seguridad resulta crucial y determinante en este sentido. Y es que, como recientemente se señalaba, «nosotros estamos dispuestos a garantizar a los militares si regresan a sus cuarteles que no habrá exigencia de responsabilidades por su actuación durante estos diez años. Pero no vamos a repaldar la pervivencia de régimen autoritario camuflado bajo un barniz democrático».

(Continuar)



URUGUAY: • Hacia una
• democracia vigilada

Arturo
PEREZ-REVERTE
Enviado especial



2 LOS MILITARES SI AFERRAN AL PODER

EN el diálogo Gobierno militar-partidos políticos que va a abrirse en Uruguay el próximo mes de marzo, los miembros de la cúpula de poder castrense están dispuestos a apoyarse en un programa extraído de aquella Constitución a su medida que, hace dos años y medio, el pueblo uruguayo rechazó por abrumadora mayoría. Sobre la polémica supervivencia de las funciones del Consejo Nacional de Seguridad, punto clave de la negociación, el general Julio César Rapela, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas Uruguayas (COMAS-PO), manifestaba hace unas semanas que «en la situación actual del mundo, el COSENA es una necesidad, no sólo para el Uruguay, sino también para otros países que lo están necesitando». Como se ve, la exigencia de que las fuerzas armadas sigan siendo árbitro directo de la situación política (modelo pensado incluso «para la exportación»), no parece ser indicio de que el diálogo que se anuncia próximo goce de augurios extremadamente propicios.

El plan «democratizador» de los militares uruguayos consta de tres etapas. La primera, consistente en la realización de elecciones primarias para constituir las convenciones de los partidos políticos que dialogarán con las fuerzas armadas, se cumplió en noviembre del año pasado, si bien los resultados fueron distintos a los que los militares esperaban. Como ya señalábamos en el capítulo anterior, las tendencias más progresistas de los partidos Blanco y Colorado se alzaron con la victoria.

La segunda fase, que debe iniciarse el mes próximo, consiste en la negociación entre estos representantes políticos y los militares para la elaboración de un nuevo texto constitucional que será sometido a referéndum (si no se interrumpe el proceso democratizador) en noviembre de este mismo año. Finalmente, en noviembre de 1984 se prevé la celebración de elecciones generales, de las que surgiría el gobierno civil destinado a recuperar el poder de manos de los militares, culminación del proceso prevista para marzo de 1985.

● LA «LEY FUNDAMENTAL NÚMERO DOS»

Visto así, en lectura rápida, cualquiera diría que, en vista del desastroso resultado de sus diez años de gestión en todos los sectores del país, los milicos uruguayos han decidido doblegarse ante el clamor popular y dar luz verde a la democracia. Pero (siempre hay un pero, y más en Iberoamérica) en Uruguay no es democracia todo lo que reluce a la vuelta de la esquina. De momento, en los comicios internos de los partidos políticos del pasado noviembre sólo fueron autorizados a participar los partidos Nacional (Blanco) y Colorado, así como la minoritaria católico-integrista Unión Cívica, quedando fuera las formaciones políticas más radicales integradas en el Frente Amplio Opositor. Desde el exilio, los dirigentes del FAO han denunciado esta institucionalización

de un sistema nada democrático, que, en virtud de la ley orgánica de Partidos Políticos, excluye a perpetuidad a todos los sectores de la izquierda uruguaya, desde la Democracia Cristiana hasta los grupos marxistas.

La llamada «ley Fundamental número 2, Orgánica de los Partidos Políticos», mantiene las proscripciones políticas, que afectan en Uruguay a casi 20.000 personas y crea infranqueables barreras para la constitución de nuevos partidos de índole progresista. Además, rizando el rizo, prohíbe expresamente la creación de formaciones que «por ideología, principios, denominación o forma de actuación, evidencien conexión con partidos, instituciones u organizaciones extranjeras», lo que no sólo paraliza cualquier intento de establecer formaciones democristianas, liberales, socialistas o comunistas, sino que, según los periodistas uruguayos exiliados Sergio Meigorejo y Alberto Carbalho, «interpretado estrictamente vendría a prohibir hasta la existencia de los pocos partidos que la ley reconoce expresamente».

Así están las cosas. De cara al diálogo del mes próximo, los militares uruguayos se esfuerzan en dejar bien sentado que siguen resueltos a aferrarse al poder, marcando a su criterio los límites de la democratización que pretenden administrar con cuentagotas. «Tanto les ha gustado el ejercicio del poder —declaraba Jorge Batlle, dirigente proscrito del Partido Blanco— que ya no se conforman con disfrutarlo en la práctica, sino que quieren ganarlo en las urnas». Lo cierto es que los milicos que reinan en Montevideo se niegan en redondo a que la democracia traiga aparejado un sistema político «demagógico, excesivamente liberal y pluralista», como el existente antes del golpe de 1973. Por supuesto, no tolerarán que cualquier gobierno les exija responsabilidades por la represión ejercida contra el pueblo uruguayo en la etapa de la lucha antisubversiva que, sin haber alcanzado las cotas de Argentina o Chile,



Durante diez años, una férrea dictadura militar ha regido los destinos del Uruguay.

● Ante las negociaciones del próximo mes de marzo, las Fuerzas Armadas, resueltas a otorgar las concesiones con cuentagotas

● La «ley Fundamental número 2» excluye a perpetuidad todas las formaciones políticas de izquierda

● El sector «ultra» del Ejército considera «excesivamente liberal» el reducido margen de actuación de las formaciones políticas autorizadas

fue, sin embargo, meticulosamente brutal.

● ¿GOLPE DENTRO DEL GOLPE?

Como se ve, al margen de actuación que los militares están dispuestos a otorgar a

uruguayos, los militares han hecho todo lo posible por establecer una «criba» que sólo dejase llegar a la mesa de negociaciones a aquellos sectores de los partidos políticos autorizados que les eran más favorables. Por los agujeros de esa criba, gracias a la espectacular demostración de afán democrático del pueblo uruguayo, se les han colado personajes mucho más progresistas de lo que en principio se esperaba. Ahora, los uruguayos del país y los del exilio tie-

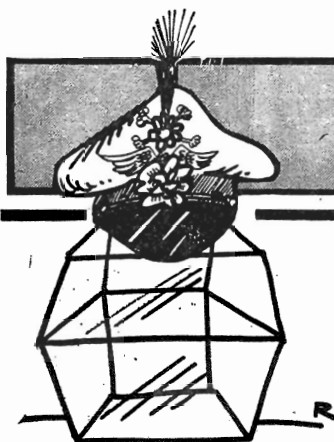
nen los ojos puestos en «hombres, en cuyas manos encuentra el doblegarse a las presiones de las Fuerzas Armadas y proporciona estas la coartada que te buscan para seguir manteniendo los hilos del poder, sin transigir en marcha hacia una democracia plena, libre de injerencias castrenses en un poder ejecutivo que debe ser exclusivamente civil y representativo».

Hay voces pesimistas, basan sus malos augurios en el conocimiento de la se castrense uruguaya. Mientras los militares sensatos (el grupo minoritario) sostiene que la oportunidad de salida a la flexibilidad de éste durante las negociaciones mayor parte de las Fuerzas Armadas constituye un que homogeneice, en el que sector contestatario está mado por aquellos que «sideran «demasiado liberal» el programa de apertura ofrecido por la cúpula militar a las fuerzas políticas del país. Y de que les pueden ir todavía peor, claro síntoma del miedo algunos sectores uruguayos a un «golpe dentro del golpe», que radicalizaría hacia la derecha las posturas de los milicos y alejaría por tiempo indefinido la posibilidad de un retorno a la normalidad y a la democracia. El sector «ultra» de las FF.AA. se opone a cualquier concesión democrática.



El general Alvarez, saludando el día de su toma de posesión. El sector «ultra» de las FF.AA. se opone a cualquier concesión democrática.

(Continuará)



URUGUAY: ¿Hacia una democracia vigilada?

Arturo
PEREZ-REVERTE
Enviado especial



3



A principios de los 70, la lucha contra la guerrilla tupamaro se tradujo en una represión feroz

ALGUIEN, uno de esos aficionados a hacer frases, dijo una vez que este país era «la Suiza de América», refiriéndose sin duda a su pequeña extensión (187.000 kilómetros cuadrados), a la solidez de sus instituciones democráticas y a su principal riqueza: la crianza de ganado vacuno. Sin embargo, en el Uruguay actual no hay nada que recuerde a Suiza. La extensión territorial sigue siendo la misma, pero las instituciones democráticas desaparecieron o fueron anuladas a golpe de bota militar, y la economía nacional, basada en la exportación de carne y lana, se encuentra sumida en el más absoluto desastre.

De colonia española, Uruguay pasó a principios del XIX a convertirse en terreno abonado para el capital extranjero, gracias a la actitud de la burguesía nacional, más propensa a cuidar intereses británicos con fáciles ganancias que a desarrollar un vigoroso capitalismo nacional. El fugaz paso del líder independentista José Artigas, creador de la más avanzada Constitución de cuantas conociera el Uruguay, al Código Agrario inició en 1815 una drástica reforma social en el país. Sin embargo, su prematura muerte a manos de tropas al servicio de Inglaterra dio al traste con las esperanzas populares. Durante el resto del siglo, respaldados los grandes propietarios por el imperio británico, los beneficiados por la reforma agraria fueron paulatinamente despojados de sus propiedades. El resultado, todavía hoy, está a la vista. Un cuatro por ciento de los propietarios uruguayos poseen el sesenta por ciento del suelo nacional.

LA SENDA DE LA REPRESIÓN

Ya no es Gran Bretaña la que dicta su ley en Uruguay, pero el relevo fue tomado por los inevitables Estados Unidos. Según la periodista Virginia Galiano, «en 1916 el capital estadounidense no representaba más del veinte por ciento de las inversiones privadas directas de América Latina. Hoy llega al setenta y cinco por ciento de dichas inversiones y, lo que es más grave, la rentabilidad en el área latinoamericana duplica las obtenidas en cualquier otro lugar del planeta». Uruguay se halló en el centro de ese pulpo económico dirigido desde Washington. Después de la segunda guerra mundial, como fue el caso de Argentina, la producción nacional de carne y lana hizo conocer al país una etapa de indudable prosperidad, lo que posibilitó el nacimiento de una burguesía culta, educada con libertad en una excelente Universidad. En el marco de esta democracia burguesa

el movimiento obrero comenzó a organizarse, agrupándose los sindicatos en una Confederación Nacional de Trabajadores de gran peso político. La reforma constitucional de 1966 dio paso al sistema presidencial (hasta entonces, el ejecutivo había sido ejercido de forma colegiada por nueve representantes populares). La crisis económica que ya se cernía sobre el país puso fin a la era de prosperidad, creando un clima propicio a enfrentamientos sociales. Entonces, la clase dirigente se internó en el camino sin retorno de la represión. Los partidos políticos quedaron ilegalizados, las huelgas fueron prohibidas y se ejercieron fuertes presiones sobre la Prensa liberal o de izquierdas. Y llegó 1971.

En esa fecha, el candidato de la clase dirigente uruguaya, Juan Bordaberry, venció a la coalición de comunistas, socialistas y democristianos integrada en el Frente Amplio Opositor. Tras el triunfo electoral de la oligarquía uruguaya, con el incondicional respaldo del capital norteamericano, el país se hundió cada vez más en el pozo de la represión. El principal objetivo a eliminar fue el Movimiento Nacional de Liberación, mundialmente conocido como «tupamaros».

LOS «TUPAS»

Los «tupas» preconizaban la violencia, a través de la guerrilla urbana, como único medio para conseguir el cambio social que tanto necesitaba el país. Los jóvenes universitarios y obreros integrados en el movimiento, a pesar de rechazar las urnas como vía de cambio, concedieron una tregua en sus acciones durante los comicios de 1971, reemprendiendo después el camino de la lucha armada.

El Gobierno Bordaberry, ya profundamente ligado a los militares, desencadenó contra los tupamaros una represión feroz, en la que participaron tanto Ejército y Policía como los tristemente célebres grupos paramilitares de tan rancio abolengo en Iberoamérica. Los princi-

Medio millón de exiliados



La presencia militar es omnipresente en todos los sectores del país

UN PAÍS DESMANTELADO

Lo que se pretendía era frenar el avance sindical y del Frente Amplio. Y se consiguió. Tras el golpe de Estado que habría de conducir muy pronto a la extinción de la democracia constitucional en Uruguay, el Parlamento quedó disuelto; la Universidad, en estado de sitio; las garantías individuales fueron suspendidas y los tribunales militares mataron a 5.000 personas en los cárceles. Hoy en 1983, 500.000 uruguayos viven en el extranjero, buena parte de ellos como exiliados políticos.

Los resultados, tras diez años de dictadura militar, están a la vista. La cultura uruguaya ha sido especialmente perseguida y algunos de los más destacados intelectuales y escritores (Benedetti, Galeano, Onetti, Cristina Peri Rossi) permanecen exiliados. La situación política tiene un lógico reflejo en la economía: la clase trabajadora, víctima de la inflación, ha perdido el 50 por 100 del poder adquisitivo de su salario. El nivel de vida ha descendido de forma alarmante, con repercusiones en los sectores de vivienda, salud y educación. Los productores del campo, aquellos que en principio deberían disfrutar de las inmensas posibilidades del país en materia agraria, se encuentran asfixiados eco-

• Diez años de dictadura militar han sumido al país en una catástrofe económica sin precedentes

• El aniquilamiento de los «tupamaros» fue un pretexto para que el Ejército barriera literalmente las filas de los partidos de izquierda

• Desde primeros de siglo, el capital norteamericano proyecta su larga sombra sobre la nación uruguaya

nómicamente. Los pequeños productores ya están arruinados hace mucho tiempo, y ahora parece llegada la hora de los medianos e incluso de los grandes. La estructura económica nacional, basada como en Argentina, Chile y Brasil, en el intento de crear un gran aparato especulativo, ha llevado al desastre al aparato productivo nacional. La crisis se hace extensiva a la industria, originando un alto nivel de desempleo. Y esta situación de emergencia que afecta a los ingresos basados en la producción del país, repercute sobre el comercio interior, al mermar considerablemente la capacidad adquisitiva de la población.

(Continuará.)



URUGUAY: ¿Hacia una democracia vigilada?

Por Arturo PEREZ-REVERTE
Fotos: Rafael MARTINEZ

El aislamiento político de los militares uruguayos es absoluto dentro del país, mantenido y acentuado en los últimos tiempos. La dictadura que gobierna desde hace una década, una de las más represivas de América Latina, es también de las más desprovistas de apoyo interno. Esto se produjo ya desde el mismo golpe de Estado; desde la huelga general, cuando el golpe de Bordaberry, la postura de estudiantes y trabajadores quedó clara. No hay una sola organización política o sindical que apoye al régimen.

Hugo Villar, secretario ejecutivo del Frente Amplio Opositor uruguayo, es uno de los 500.000 súbditos de este país a los que la persecución política o la crisis económica arrojaron al extranjero. Su partido, que aglutina a las fuerzas uruguayas de izquierda, es ilegal en Uruguay, y la actuación de sus miembros sólo puede llevarse a cabo de forma clandestina. Fundado el 5 de febrero de 1971, varios de los más importantes dirigentes, incluidos miembros del estamento militar, se encuentran encarcelados.

¿Qué significa el Frente Amplio Opositor en el espectro de las fuerzas políticas uruguayas?

—El FAO es la izquierda, el sector más progresista. A pesar de la ilegalización de que ha sido objeto por parte del régimen militar, a pesar de la represión, de la cárcel y del exilio, no ha podido ser destruido. Mantiene actividad clandestina dentro del Uruguay, y no le quepa duda de que su militancia decidirá poderosamente el resultado de cualquier elección democrática que se haga en el país. Del medio millón de uruguayos exiliados, buena parte se integran en el Frente. Funcionamos en cincuenta ciudades de treinta países, tratando de estimular la solidaridad internacional.

—¿Están satisfechos de la respuesta? Me refiero a si esa solidaridad internacional se ha conseguido satisfactoriamente o no.

—Bueno, lo que puedo decirle es que la respuesta ha sido positiva, sí. Positiva. Aunque nos haya dado mucho trabajo. Tenemos relaciones con las organizaciones democráticas de todos esos países. Miro, en España hemos ido consiguiendo apoyos del Partido Socialista, del Comunista, de las dos grandes centrales sindicales... Hasta de la UCD. El propio presidente, Felipe González, se ha entrevistado con José Pedro Cardoso, presidente del Partido Socialista Uruguayo... En Italia, por ejemplo, también hemos conseguido expresiones de solidaridad. Precisamente allí se acaba de integrar una comisión, compuesta por alcaldes de varias ciudades, para la liberación de Seregini y la democratización en el Uruguay. Aparte de esos apoyos nacionales, contamos también con la solidaridad de las organizaciones internacionales democráticas, como la liberal, la democristiana y la socialista. Sus más destacados líderes se han pronunciado contra el régimen militar que gobierna en Montevideo. También ha in-

tervenido la COPAL, la Conferencia de Partidos Políticos Latinoamericana...

● AUN HAY VIAS POLITICAS

—¿Tienen efectos prácticos esos pronunciamientos? Hay uruguayos que sostienen que la única forma de derribar a un régimen militar que se aferra al Poder es mediante la lucha armada. Estilo tupamaro, ya sabe.

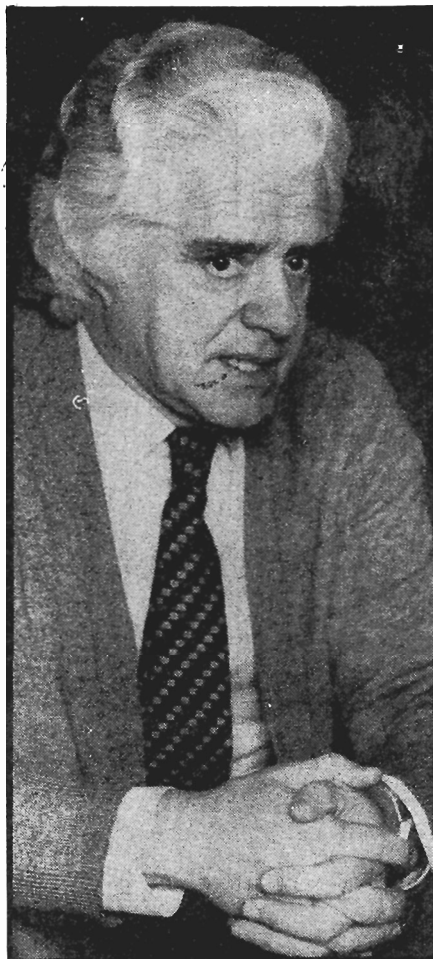
—Mire, el país se encuentra ante una negociación militares-fuerzas políticas legalizadas, en la que aunque al FAO no se le permite asistir pueden adoptarse vías más o menos fiables hacia la democracia. Nosotros, aunque le repito que estamos excluidos de esa negociación, damos un voto de confianza a los representantes de los partidos blanco y colorado que se van a sentar a la mesa con los milicos. Creemos que no están agotadas las vías políticas para el cambio de la situación uruguay, que no es equiparable a la de, por ejemplo, América Central. Nuestro



- “En caso de que fracasase la vía política, no descartamos la lucha armada”
- “Entre los desaparecidos en Argentina se cuenta un mínimo de 121 uruguayos, entre ellos seis niños”

país tiene una larga tradición democrática hasta mil novecientos setenta y tres, y eso puede tener importante influencia en el desarrollo del tema. El Frente Amplio Opositor piensa que la solución política es posible.

—¿Y si la intransigencia de los militares y la presión del sector «ultra» bloquea cualquier solución política



Hugo Villar, secretario ejecutivo del Frente Amplio Opositor

parte de ellos. Cuando Uruguay rechazó la Constitución que querían imponernos, y cuando en las elecciones internas de los partidos triunfaron las tesis más progresistas, comprendieron que el país no está dispuesto a consagrarlos en el poder. Los militares uruguayos saben que hay que contar con la voluntad popular, y la voluntad popular dice que hay que volver a un Estado de derecho en breve plazo.

● CUATRO PUNTOS BASICOS

—¿Cree que existe el riesgo de un golpe «ultra» dentro del golpe?

—Sí. Desgraciadamente es un riesgo que existe. Entonces estaríamos otra vez como al principio.

—¿Está el FAO de acuerdo con las posturas que los representantes de los dos partidos autorizados van a llevar a la mesa de negociaciones?

“LA

DICTADURA

MILITAR • “No hay una sola organización política o sindical que apoye al Régimen”

ESTA AISLADA”

—Vemos su gestión como algo que puede ser positivo, pero le recuerdo que el Frente Amplio Opositor plantea cuatro puntos fundamentales en los que debe basarse cualquier negociación con los militares: liberación del millar de presos políticos que hay en el país; levantamiento de todas las ilegalizaciones y proscripciones; restitución de derechos y libertades fundamentales de asociación, reunión y expresión; finalmente, necesidad de adoptar medidas económicas urgentes... Para nosotros, cualquier solución política pasa por esos cuatro puntos, y esperamos que los representantes de los partidos que tienen sobre sí la tremenda responsabilidad de negociar, lo tengan muy en

celentes, no le quepa duda. En el cono sur latinoamericano hay una coordinación internacional de la represión con intercambio de asesores. Cooperaron y siguen haciéndolo, las policías argentina, chilena, brasileña y uruguayas. Aparte de los Estados Unidos. También en Uruguay hemos tenido varias decenas de desaparecidos, buena parte de ellos fueron detenidos en Argentina, a causa de intercambios de información. Gente que hoy a países vecinos fue encarcelada o asesinada. En Argentina, entre los desaparecidos se cuentan un mínimo de ciento veintinueve uruguayos, de los que seis son niños.

FIN DEL SERIAL